



**Universidad**  
Zaragoza

# Trabajo Fin de Grado

La figura del procurador de los tribunales en el  
proceso civil

Autor/es

Beatriz Cabrero Vallejo

Director/es

Juan Francisco Herrero Perezagua

Facultad de Derecho

2019



## ÍNDICE

1. Introducción .....	7
2. El procurador.....	8
a) Concepto.....	8
b) Contexto histórico y evolución.....	9
c) Estructura.....	12
I. Consejo General de los Procuradores .....	12
II. Los Consejos Autonómicos.....	13
III. El colegio.....	13
d) Funciones.....	14
e) Régimen de relaciones con otros sujetos.....	15
f) Derechos económicos. Tutela privilegiada.....	17
g) Incompatibilidades .....	20
i. Régimen General de incompatibilidades .....	20
ii. Consecuencias de su incumplimiento .....	20
iii. Casos especiales: el abogado del Estado, letrado de la Seguridad Social, y Administraciones Públicas .....	22
h) Responsabilidad del procurador de los tribunales .....	24
3. Planteamiento sobre la necesidad de intervención del procurador .....	25
4. Comparativa con otros países.....	28
5. El procurador en el futuro. ....	32
a) Iniciativas .....	32
I. Mejora del sistema telemático .....	32
II. Aproximación a la figura del <i>huissier de justice</i> .....	35
I. Propuestas desde el Consejo General de Procuradores de España .....	36
b) Expediente Europilot .....	37
6. Conclusiones .....	39
7. Bibliografía.....	40



## **Listado de abreviaturas**

- Art.: Artículo
- BOE: Boletín Oficial del Estado
- CC: Código Civil
- CP: Código Penal
- CGPE: Consejo General de Procuradores de España
- CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores
- CCAA: Comunidades Autónomas
- CGPJ: Consejo General del Poder Judicial
- EEE: Espacio Económico Europeo
- IPN: Instituto Politécnico Nacional
- LAJ: Letrado de la Administración de Justicia
- LAJG: Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil
- LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial
- RD: Real Decreto
- Rec: Recurso
- SS: Seguridad Social
- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
- STS: Sentencia del Tribunal Supremo
- TS: Tribunal Supremo
- UE: Unión Europea



## 1. Introducción

Desde la primera aparición de la figura del procurador, se han suscitado dudas sobre la necesidad de su intervención en el proceso, y han ido aumentando a medida que avanzaba la sociedad y con ella, la tecnología. La procura surgió de la necesidad de la dirección y tramitación del patrimonio del propietario *dominus* en su ausencia. Esa necesidad de administración se desarrolló de tal manera, que los ciudadanos siguen precisando hoy en día de un técnico experto en Derecho Procesal para poder ampararse ante los tribunales. En el ejercicio de su trabajo, aportan un sistema de garantía doble en los procesos: garantizan que todas las fases del proceso, así como las actuaciones de los implicados en él, se ajusten a la normativa, y aportan agilidad a los procedimientos.

Debido a la velocidad a la que se desarrollan las nuevas necesidades de la población, la labor de la procura se ve envuelta en una situación marcada por la necesidad de evolución y aprendizaje constante, búsqueda de nuevas competencias, además de actualización del *modus operandi* respecto de las más tradicionales, como la tramitación de escritos en relación con el nuevo sistema de presentación electrónica en el que participan, entre otros sujetos, los profesionales de la Administración de Justicia, de manera preceptiva a la luz del artículo 273 LEC: *“Todos los profesionales de la Justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como la fecha en que estas se hicieron”*.

España es uno de los pocos países a nivel mundial que conserva esta institución. Solamente el 25% de las naciones mantienen activo al procurador. Esto hace cuestionarnos si es realmente necesaria la intervención del procurador en el procedimiento, o por el contrario es el desconocimiento el motivo por el cual es constantemente cuestionado.

En el presente trabajo estudiaremos las funciones de éste y su actuación en el proceso, así como la obligatoria adaptación de sus tareas en el futuro, con la especial mención de la opinión europea y comparativa de los diferentes Estados de la UE.

## **2. El procurador.**

### **a) Concepto**

El procurador es un graduado o licenciado en Derecho, cuya especialidad descansa en el Derecho Procesal, y actúa como representante de los litigantes ante los órganos jurisdiccionales. Se trata de una profesión independiente, libre y colegiada que ostenta el deber de colaborar con los tribunales en su función pública de administrar la justicia.

El marco normativo de esta figura está integrado por el artículo 36 de la Constitución Española, la LEC (artículos 23 a 34), LOPJ (artículos 543 a 546), Ley de Colegios Profesionales 2/1974 de 13 de febrero (modificada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre, y en el Estatuto General de los Procuradores de los tribunales de España, aprobado por RD 1281/2002, de 5 de diciembre, además de los estatutos específicos de cada colegio y Ley de procedimiento en los diversos órdenes jurisdiccionales. Cabe destacar, a su vez, el Código Deontológico de los Procuradores de los tribunales, donde se establecen las normas-guía de comportamiento en aspectos relacionados con el secreto profesional, la independencia, honestidad, publicidad de sus actos, relación con otros sujetos, así como con los tribunales, e incompatibilidades de su ejercicio.

Para acceder a la profesión de procurador es necesario, además de estar en posesión de nacionalidad española u otra nacionalidad de la UE o de los Estados parte del acuerdo sobre el EEE, así como lo dispuesto en convenios o tratados internacionales, haber alcanzado la mayoría de edad, tener plena capacidad de obrar y ser “*Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario equivalente*” (art. 23. 1 LEC, conforme a la redacción que le dio la Ley 42/2015, de 5 de octubre).

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, modificado por el Real Decreto 150/2014, de 7 marzo: marca los requisitos que deben reunir los aspirantes a desempeñar la profesión de procurador. Esta misma ley establece que, aquellos que terminen sus estudios con posterioridad del 31 de octubre de 2013, deberán realizar el máster de acceso a la Procura, con la posterior prueba de aptitud.



Una vez terminada la formación, el aspirante apto debe inscribirse en el colegio de procuradores de la ciudad en la que ejercerá la profesión.

Finalmente, el Tribunal Constitucional se refiere de forma conjunta a los abogados y procuradores, en la STC 110/1993 de 25 de marzo, como *necesarios cooperadores de la Administración de Justicia* (aludiendo al Libro V de la LOPJ) ... *sin cuya colaboración no solo se debilitaría gravemente el normal funcionamiento del “proceso”, sino que resultarían de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que impone la constitución a la tutela judicial.*

### **b) Contexto histórico y evolución**

La figura del procurador aparece como resultado de la necesidad de representar a las partes en el proceso, aunque con funciones más limitadas. Antiguamente, actuaba como auténtico representante del litigante en el juzgado, para aquellos asuntos relacionados con la causa, controlando la gestión del expediente y recibiendo los poderes para pleitos. El *cognitor*, el primer representante conocido, concretaba sus tareas en la representación del *dominus* en el proceso<sup>1</sup>. Posteriormente, aunque no como figura procesal, nace el *procurator*, a quien además de representar al *dominus*, se le permitía administrar los patrimonios en supuestos de ausencia del titular. Fueron sus facultades de administración las que le encaminaron al ámbito de la representación procesal, a través de su capacidad de ejercitar acciones.

A este administrador de patrimonios ajenos se le conocía como *procurator omnium bonorum*<sup>2</sup>, y su relación con el administrado se basaba en la plena confianza, pues el primero actuaba como *alter ego* del segundo tanto en la toma de decisiones sobre el patrimonio del señor en su ausencia, como en su representación procesal, actuando entonces como *cognitor* o *procurador ad litem*.

Con la llegada del Derecho Visigodo, los germanos recopilaron la ley romana y establecieron límites en relación con el ejercicio de la procuraduría, prohibiendo a las mujeres y siervos desempeñar tal cargo. Todo ello quedó regulado en el Libro I del Breviario de Alarico.

---

<sup>1</sup> C.GARCIA VÁZQUEZ. *Algunas consideraciones en torno al procurator y a la negotiorum gestio*. R.I.D.A., 38, 1991, p. 153 ss

<sup>2</sup> RICART ANDREU: *El procurador en la Historia*. <http://www.iuspostulandi.com/?q=elprocurador>

El procurador visigodo acreditaba su representación a través de un apoderamiento elaborado por su mandante, con quien pactaba desde el principio la remuneración por su trabajo, pero sin habilitación especial para tal ejercicio, por lo que cualquier hombre podía actuar como procurador.

Durante la época musulmana, el *Libro de Aljoxan*<sup>3</sup> se refería al *ukil* como individuo designado para ejercer la procura, que únicamente representaba a las personas con cierta categoría social, y el Juez o *qadi*, podía aceptar o no su intervención

En la Edad Media, el procurador es conocido como *personero*<sup>4</sup> a quien *faze algunos pleytos o cosas ajenas por mandado del dueño dellas*, un cargo designado por el alcalde o escribano público del municipio en cuestión, encaminado a representar en el proceso al dueño de la acción, para ocupar su lugar, ya sea porque no pudiera acudir al pleito, o porque no quisiera. Se inicia una regulación de la figura en numerosas compilaciones y fueros de la época, como en los Fueros de Aragón de Jaime I el Conquistador (1247) o el Fuero General de Navarra de 1238, entre otros.

Cabe mencionar el Fuero Real y las Siete Partidas (año 1265) de Alfonso X el Sabio, cuando en su tercera partida<sup>5</sup> se inicia el Estatuto oficial y profesional del oficio procurador. Es en este periodo de la historia donde el procurador adquiere la importancia que se conserva hoy en día: cualquier persona podía ejercer la profesión sin requerimiento profesional, aunque en Aragón era común que los notarios asumieran esta función, debido a las responsabilidades que asumían.

La oficialidad de la función representativa no se da hasta la sustitución de la calificación de personero por la de procurador, con la ineludible superación de un examen para establecer la capacidad para ejercer el oficio, y tras ello, prestar juramento de fidelidad al cargo e inscribirse en la matrícula de procuradores. Esta forma de acceder al cargo, según las Ordenanzas Reales de Castilla de 1484, las Ordenanzas de Medina de 1489 y las

---

<sup>3</sup> VIRTUDES GONZÁLEZ. *La figura del procurador*. <https://www.virtudesprocuradora.es/un-poco-de-historia/>

<sup>4</sup> MÁRQUEZ GONZÁLEZ. *La persona jurídica*. *Revista de Derecho Privado*, nueva época, año III núm 7, enero-abril de 2004, pp 93-114, p. 99.

<sup>5</sup> ALFONSO X EL SABIO. Código de las Siete Partidas. *Tercera Partida, TÍTULO 5: De los personeros: “Ley 1: Personero es aquel que recauda o hacer algunos pleitos o cosas ajenas por mandato del dueño de ellas, y tiene nombre personero porque aparece, o está en juicio o fuera de él. En lugar de la persona del otro. Ley 2: Todo hombre que fuere mayor de veinte y cinco años que no estuviere en poder de otro, así como de su padre o de su guardador, y fuere libre en su memoria, puede hacer de personero sobre pleito que le pertenezca”*

Ordenanzas de Madrid para abogados y procuradores de 1492, suponía una garantía de moralidad e idoneidad.

A lo largo de los siglos XVI y XVII se establecen normativas que ordenan el oficio, destacando la Novísima Recopilación de 1802 que reunió toda la normativa variada en relación con la Procura. Esta recopilación se basó en otros textos normativos, como la Real Cédula de 7/5/1573, destinada a evitar el intrusismo en el ejercicio de la procura en los Reales Concejos, Audiencias y Chancillerías, y regulando la retribución de éste a través de tasas establecidas por la Ley<sup>6</sup>, para posteriormente limitarla mediante el primer arancel. No será hasta el año 1782 cuando se publiquen los Aranceles Generales de las Chancillerías, Audiencias y Juzgados Ordinarios, destinados a regular los honorarios de las profesiones jurídicas, con excepción de la abogacía.

Con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, se establece de forma obligatoria y como regla general, la comparecencia en el acto del juicio a través de procurador. Esta comparecencia, en opinión de BÁDENAS ZAMORA, para los juristas de la época supuso un beneficio a favor de los litigantes, pues la intervención procesal directa del procurador sanaba el problema del acceso de las partes con insuficiencia de recursos económicos al proceso judicial, además de resolver, con la participación del procurador, la inexperiencia de estos en los negocios judiciales.<sup>7</sup>

Por otro lado, se establecen las incompatibilidades entre el procurador y el escribano de Audiencia, siendo este último un cargo público autorizado a dar fe de las escrituras y demás actos que se desarrollaban ante él. Finalmente, se concretan las obligaciones en el desarrollo de la labor de procura para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, y se prohíbe el *pacto de cuota litis*.

La Ley Orgánica del Poder Judicial terminó de alzar la figura del procurador ya en el siglo XIX, pues recopiló definitivamente todos los preceptos referentes a la Procura, y estableció un sistema de prestación de fianza y superación de un examen para ejercer válidamente la profesión, exigiendo el título de bachiller e inscribirse en un colegio profesional.

---

<sup>6</sup> LÓPEZ NEVOT. *Pedir y demandar, acusar y defender. Los procuradores fiscales de las Audiencias y Chancillerías castellanas*. AHDE, tomo LXXXIII, 2013, p.265, p. 281.

<sup>7</sup> BÁDENAS ZAMORA. *El derecho a la justicia de balde en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855*. AHDE, tomo LXXXIV, 2014

No fue hasta el siglo XX, a través del Decreto 6/5/1931, cuando se permite a las mujeres acceder a esta profesión, y se crea la Junta Nacional de 103 II.CC de Procuradores (Decreto de 26/9/1943), como primer órgano representativo de los procuradores en España (precedente del actual Consejo General). Asimismo, el Decreto de 19/12/1947 promulgará el primer Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, que establece la necesidad de estar en posesión de Licenciatura en Derecho para el ejercicio en las capitales con audiencia. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 reafirmó la utilidad de la figura del procurador cuando determina su obligatoria intervención en todo tipo de procesos.

### **c) Estructura**

#### **I. Consejo General de los Procuradores**

Es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y capacidad para realizar las funciones de coordinación, ejecución y representación de los ilustres colegios de procuradores de los tribunales. Se encuentra integrado por distintos órganos representativos:

##### *i. El pleno*

Constituye el órgano máximo de decisión y decisión dentro del Consejo. Está compuesto por un presidente decano, el presidente de la mutualidad, un vicepresidente decano, un secretario, un tesorero, un vicesecretario, un vicetesorero, los decanos de todos los colegios de procuradores de España, y consejeros honorarios. Estos últimos acudirán al pleno cuando el presidente los convoque.

##### *ii. La Comisión Permanente*

Este órgano toma en consideración de los asuntos sustanciales para la profesión y para el Consejo, poniéndolos en conocimiento del pleno para su ulterior confirmación. La conforman el presidente decano, un vicepresidente, un vicesecretario, el tesorero, un vicetesorero y los presidentes de los consejos superiores de las CCAA de España.

### iii. La Comisión Ejecutiva

Conoce del Consejo y de su organización, realiza tareas de gestión, e informa sobre los temas susceptibles de comunicar a la Comisión Permanente. Está compuesta por el presidente decano, un vicepresidente, el secretario, un vicesecretario, el tesorero y un vicesorero.

## II. Los Consejos Autonómicos

Estos órganos directivos, están formados por los colegios de las CCAA con competencias transferidas por el Consejo General y trabaja en constante colaboración con la Administración de Justicia.

## III. El colegio

El Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los tribunales en España, define los colegios de procuradores como *“corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuyo funcionamiento y estructura interna habrán de ser democráticos”*<sup>8</sup>. Se rigen por la legislación autonómica en la que se encuentre, además de la normativa legal susceptible de aplicación en todo el territorio español: el Estatuto General, el Estatuto del correspondiente consejo de cada CCAA, por reglamentos de régimen interior y estatutos particulares, además de los acuerdos que se aprueben por los órganos corporativos, teniendo en cuenta las competencias que ostentan.<sup>9</sup>

Cada colegio se encuentra regido por el decano, la Junta General, y la Junta de Gobierno, y tiene funciones tales como la colaboración con los órganos jurisdiccionales en la Administración de Justicia, vela los procuradores colegiados en éste actúen conforme a los intereses y necesidades de los litigantes, y toma medidas para garantizar la buena práctica de las obligaciones que supone el ejercicio de la profesión.

---

<sup>8</sup> Véase art 77.1

<sup>9</sup> Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales en España, art. 80

#### **d) Funciones.**

Según el artículo 1 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, el procurador ejerce como función principal la “*representación técnica de quienes sean parte de cualquier clase de procedimiento*”. Además, son los encargados de establecer un orden para la mejor administración de la justicia, haciendo lo necesario para la defensa de los intereses del cliente y teniendo tanto a éste como a su abogado al corriente del estado del asunto. Con todo ello, debe participar de forma activa en los actos y diligencias que desarrolla, y asistirá personalmente cuando sea preciso.

Por una parte, respecto de la ejecución, el procurador realiza los actos necesarios para la pertinente ejecución de los actos judiciales, especialmente para el embargo, con ciertos límites:

El Tribunal Supremo determina que el procurador no tiene la obligación de instar la prórroga de la anotación preventiva de embargo<sup>10</sup>, considerando que no es un acto de mera tramitación, sino una actuación dirigida a asegurar la eficacia de la medida cautelar, como garantía del buen procedimiento, por lo que será el abogado quien debe conocer los plazos perentorios y, en función de ellos, actuar conforme las instrucciones de su cliente.

Ello está fuera de sus funciones, por suponer una decisión que corresponde al abogado (que es quien debe conocer los periodos temporales en los que se desarrollan), y, por otro lado, supone un coste económico que obliga a que la decisión sea adoptada por el letrado y su representado, lo que no impide que el procurador, actuando de hecho, pueda realizar esa tarea de manera voluntaria.

De otro lado, ante el juzgado o tribunal, el procurador realiza su función de representación del cliente recibiendo en nombre de éste las notificaciones pertinentes para el desarrollo del proceso, colabora con la Administración de Justicia y agiliza el desarrollo del proceso; todo ello simplifica el perfeccionamiento de los actos de comunicación. Facilitan la consecución de los trámites que se precisan para ejecutar las resoluciones judiciales (sentencias, autos y decretos), y realiza la presentación de los escritos redactados por el letrado, de forma física.

---

<sup>10</sup> Véase STS. Sala 1 Pleno de 29 de mayo de 2017

En España, hasta la reforma de la ley 13/2009 de 3 de noviembre, el procurador solo podía ejercer en un único partido judicial, pero a partir de la modificación de la legislación, se le permite ejercer en todos los partidos judiciales.

Además de estas funciones principales, el procurador se encarga de la tramitación de despachos y mandamientos que se libren en el juzgado, así como exhortos que se dirijan a otro órgano judicial, y del traslado de escritos procedentes de su poderdante a los procuradores y demás partes personadas (artículo 276 y ss. LEC), para agilizar el proceso.

En su ejercicio como colaborador social de la Agencia Tributaria, tramita y paga tanto las tasas judiciales, como los depósitos exigidos para interponer los correspondientes recursos, todo ello telemáticamente o de forma personal en la entidad bancaria. Del ingreso de las cantidades que el cliente debe consignar en la cuenta del Juzgado, y su acreditación ante el órgano judicial, también se encarga el procurador, como del pago de los gastos causados a su instancia, cuando ya ha recibido la provisión de fondos de su poderdante.

Los límites se concretan en el seguimiento del juicio, comunicación, transmisión de documentación o instrucciones que le remita el abogado, tener al corriente a su poderdante y abogado del trascurso del asunto que se le hubiere confiado, defendiendo los intereses del cliente y bajo la responsabilidad que la ley imponga al mandatario (art. 26 LEC).

Por último, gestiona la publicación de anuncios oficiales (y edictos) en el Boletín del Estado, en el Boletín Oficial de la CCAA correspondiente, en periódicos, etcétera. Todo ello, con la preceptiva responsabilidad civil y penal en el ejercicio de su profesión.

#### **e) Régimen de relaciones con otros sujetos**

Conforme el Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales, el procurador mantiene relaciones con los clientes, entre procuradores, con otros profesionales del derecho, con jueces y tribunales y con la organización colegial.

En primer lugar, y según se establece en el artículo 4 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, en relación con los artículos 1709 y ss. del Código Civil, la relación jurídica que vincula al cliente y al procurador, es un mandato de representación expreso por parte de éste o del colegio para que se encargue de un asunto.

En palabras del Tribunal Constitucional, los procuradores son “*necesarios cooperadores de la Administración de justicia «así se califican expresamente» en el Libro V de la LOPJ) ... sin cuya colaboración no solo se debilitaría gravemente el normal funcionamiento del «proceso», sino que resultarían de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que impone la Constitución*”<sup>11</sup>.

El procurador es, por tanto, un profesional que ocupa en el proceso el lugar de la parte (en virtud del apoderamiento), y ejecuta por ella las actividades procesales necesarias para la concurrencia del buen fin de su pretensión, pero también ha de trabajar teniendo en cuenta la transmisión al abogado de las resoluciones que se produzcan en el proceso, e informando a éste y al cliente del rumbo del procedimiento.

Una vez comunicado, el procurador puede aceptar o rechazar libremente la representación procesal sin previa justificación, y podrá renunciar (conforme a lo dispuesto en las leyes procesales), en cualquier momento, independientemente de la fase del procedimiento en el que se encuentre. Aun así, debe tener en cuenta la obligación que tiene de cumplir con las designaciones que establece el colegio de procuradores para prestar servicios de representación de forma gratuita y en turno de oficio.

Antes de celebrar el contrato entre las partes y prestación del servicio, el procurador deberá informar del coste estimado que deberá asumir el cliente, así como la forma en la que debe hacerlo. Si el destinatario lo solicitare, el procurador deberá acotar el presupuesto detalladamente, pudiendo hacer uso para ello de los formularios a disposición realizados por el colegio. Una vez perfeccionado, siempre se deberá realizar labores de asesoramiento y mantener informado al cliente sobre las actuaciones que se realicen; ello incluye poner a disposición del cliente la documentación que este le requiera, aunque puede realizar copias para sí mismo.

Finalmente, con el cese de la representación, se deberán entregar los documentos que conserve el procurador al cliente.

En segundo lugar, las relaciones entre procuradores deben ser conforme al principio de lealtad y rectitud, siendo objetivo en la construcción de críticas, y recibirlas de la misma manera. Se trata de un vínculo fundado en el respeto mutuo y colaboración, y, en caso

---

<sup>11</sup> Véase STC 110/1993 de 25 de marzo



contrario, se informará al colegio de las infracciones profesionales que se conozcan. Se prohíbe encubrir conductas abusivas o en fraude de ley.

En caso de un procurador que pretenda cesar en la representación de su cliente, deberá facilitar toda la información necesaria al nuevo procurador, para el eficaz ejercicio de su labor. Asimismo, destaca el artículo 29 del Código, pues se obliga a los procuradores a orientar y aconsejar a los nuevos miembros del colegio cuando sea preciso.

En relación con las relaciones que se mantienen con otros profesionales del derecho, preside la colaboración de todos ellos, para facilitar el ágil desarrollo del proceso y evitar la obstrucción del mismo, en beneficio del cliente.

En cuarto lugar, al juez o tribunal competente en el asunto se le debe guardar respeto, a la vez que se colabora con la Administración de Justicia bajo los principios de lealtad, veracidad, y probidad en el cumplimiento de sus funciones, en la línea de la legalidad. Si el procurador no pudiera cumplir las actuaciones relacionadas con su labor, debe informar con antelación al órgano judicial.

Para concluir, el procurador debe estar inscrito al colegio de procuradores del lugar donde ejerza su profesión. Para ello, está obligado a satisfacer económicamente los servicios de los que se valga. A su vez, debe aportar de manera diligente los documentos que se le requieran, de nuevo con el respeto y lealtad que su profesión precisa para la representación que prestan.

En definitiva, todas las conexiones que el procurador establece con los diferentes sujetos intervinientes en el proceso y con los colaboradores de la justicia, están encaminadas para construir una organización que permita realizar efectivamente las pretensiones del cliente.

#### **f) Derechos económicos. Tutela privilegiada**

La preceptiva intervención del procurador en el procedimiento genera unos derechos económicos (aranceles) a su favor susceptibles de protección mediante los procesos de cuenta jurada, o de jura de cuentas, normados en los arts. 29 y 34 LEC. Su regulación se remonta a las “Ordenanzas para todas las Audiencias de la península e islas adyacentes” (1835), y se trata de procedimientos especiales de técnica monitoria con el fin de satisfacer el interés económico del representante técnico, a costa del patrimonio del poderdante moroso.

El legislador considera que el valor económico del litigio debe ser proporcional a la complejidad del procedimiento, y para defender la captación de ese valor, puede acudir al cauce procesal de jura de cuentas, en la que se genera una situación especial e incluso privilegiada, compatible con el principio de igualdad<sup>12</sup>, por resultar su causa conforme a razones objetivas. Su existencia se justifica con la consideración de los procuradores acreedores como sujetos colaboradores de la Administración de Justicia, y no como trabajadores en ejercicio de su profesión.

El objeto de los procesos de jura de cuentas es de carácter civil: las cantidades pendientes de pago por el deudor respecto de los derechos económicos o gastos necesarios para la continuación del proceso.

El procedimiento está atribuido al letrado de la Administración de Justicia del órgano jurisdiccional que conociera del asunto. Este requerirá al deudor moroso para satisfacer las cantidades adeudadas bajo apercibimiento de apremio, y verificará las cuentas presentadas por el procurador, y si tales sumas corresponden al poderdante asumirlas.

Las partes litigantes, en esta ocasión, serán el procurador como parte activa (en caso de fallecimiento, sus herederos<sup>13</sup>) y su poderdante deudor como pasiva, incluso en los casos en los que el procedimiento principal se resuelva a su favor respecto de las costas, siendo impuestas a la parte contraria; el resultado del asunto principal no afecta a que el procurador pueda exigir mediante la jura de cuentas la suma que le corresponde.

En los casos en los que una de las partes litiga con derecho a justicia gratuita, si la parte contraria es condenada en costas, deberá asumir el pago de su defensa, más la defensa del que gozó de ese derecho. En cualquiera de los casos, para que el poderdante deudor llegue a encontrarse en la posición pasiva de este asunto, se requiere que el procurador haya realizado previamente una petición de pago conforme las exigencias del Código Civil<sup>14</sup>. La vía ofrecida por el artículo 34 para dirigirse contra el representado titular del derecho

---

<sup>12</sup> STC 110/1993

<sup>13</sup> Enmienda nº43 de la Cámara Alta (Grupo Parlamentario Socialista), sin incluir ninguna justificación sobre ello

<sup>14</sup> Art. 1728, el mandante tiene el deber de anticipar al mandatario, si este lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiera anticipado, debe reembolsarlas el mandate, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo la anticipación.

a la asistencia jurídica gratuita será efectiva si, cuando éste fuera condenado en costas, tuviere mejor fortuna dentro de los tres años siguientes.

El proceso se inicia con la incoación por parte del procurador acreedor, presentando una demanda<sup>15</sup> acompañada de una “cuenta detallada justificada”<sup>16</sup> que indican todas las partidas justificadas que forman la suma total.

Admitida la reclamación a trámite, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que pague o se oponga en plazo de 10 días bajo apercibimiento de apremio; si se abstiene de actuar de alguna de las dos maneras, se despachará ejecución frente a él.

Las posibles conductas del deudor pueden dividirse en tres opciones. La primera, puede atender el requerimiento, cuyas consecuencias se basan en el archivo de las actuaciones, y el pago se realizará extraprocesalmente (con la correspondiente acreditación de la recepción de la suma al acreedor) o ante el órgano jurisdiccional.

En segundo lugar, si el deudor no paga ni se opone, el juez procederá a despachar ejecución por la cantidad requerida, mas las costas del proceso.

Por último, si se opone (impugna la cuenta), se entiende que el poderdante no reconoce la deuda: las cantidades le son indebidas o se han satisfecho con anterioridad. Si se desestima la oposición, deberá efectuar el pago, y si aun así no lo realiza, se despachará ejecución,

El decreto que resuelve la oposición es irrecurrible. Si no se produce oposición, el despacho de ejecución se realizará respecto de la cantidad que se reclame, más las costas. En los demás casos, si se ha producido oposición, operará lo relativo al artículo 394 LEC.

El decreto es título ejecutivo, pero no es la resolución por la cual se despacha ejecución, ya que solo se realizará si el deudor no paga en el plazo de cinco días desde la notificación y el procurador la pide. No ocurre así cuando no se formula oposición, pues el auto une el despacho de ejecución automáticamente con la ausencia de oposición.

Finalmente, lo que el decreto decide sobre este asunto no prejuzgará la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior (art. 34.2.III LEC).

---

<sup>15</sup> Ni la LEC ni la LAJG exigen forma específica en cuanto a la forma de reclamación de los aranceles.

<sup>16</sup> Art 34 LEC

## **g) Incompatibilidades**

### **i. Régimen General de incompatibilidades**

Tanto el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (arts. 23 y 24), como el Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales (arts. 15 a 17), establecen un sistema de prohibiciones e incompatibilidades, concretadas en la prohibición del ejercicio simultáneo de la abogacía, y de otras profesiones y cargos.

La extensión de esta prohibición, abarca a todos los colaboradores o integrantes de un grupo de profesionales en el que concurra cualquier tipo de incompatibilidad en cualquiera de éstos, pudiendo darse en uno o varios sujetos componentes del colectivo, es decir bastará con la concurrencia de un supuesto incompatible en uno de ellos para que se afecte a todos.

En suma, tampoco podrán aceptar encargos en los que se pueda generar un conflicto de interés entre los derechos o intereses del procurador, y su posición como profesional colegiado. En caso de darse situaciones de este tipo, cualquier integrante del colegio de procuradores estará legitimado para dar cuenta de la infracción. Si el procurador accede a trabajar en situación de conflicto de interés, estará incurriendo en falta profesional, pudiendo ser sancionado legalmente.

### **ii. Consecuencias de su incumplimiento**

El Código Penal, en el artículo 403 desarrolla las consecuencias de no respetar las incompatibilidades, tachándolo de intrusismo, como modalidad de delito de falsedades: *“El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses”*, pudiéndose imponerse una pena mayor si concurriesen los agravantes del apartado 2 del mismo artículo.

Recogido en el Capítulo V, “De las Falsedades”, junto al delito de usurpación de funciones públicas, el mencionado delito regula, por un lado, el ejercer funciones propias de una profesión, sin posesión de título académico correspondiente, o teniéndolo, no está

reconocido en España, y, de otro lado, regula el desarrollo de una profesión sin el título que habilite legalmente para su ejercicio.

Lo que restringe el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, es la “colegiación” en el correspondiente Partido Judicial. El que esté en posesión de licenciatura o grado en Derecho, y ejerza la abogacía o procuraduría sin colegiarse, realizando alguna de las conductas que quedan tipificadas en los delitos de este objeto de estudio, no estarían sujetos a castigo por delito de deslealtad profesional, sino de intrusismo<sup>17</sup>. Si la ley no se desarrollara así, según ORTS, se configuraría una paradoja de que “las penas de suspensión e inhabilitación, que eventualmente pudieran imponérsele, le privarían de una facultad que legalmente no tenía”<sup>18</sup>.

A pesar de que la colegiación suponga el único requisito formal para decretar la deslealtad profesional de los abogados y procuradores, resulta insuficiente, pues también existen límites materiales de la condición de cada profesión: es preciso que estas conductas se realicen en ejercicio de sus funciones profesionales y que el sujeto activo ha debido mantener una relación real con el cliente. Por último, GARCÍA ARÁN considera como requisito material que las conductas a las que se refiere el delito sean ejecutadas en el marco de un proceso judicial, debido a la necesaria aceptación de estos profesionales de actuar como tales<sup>19</sup>.

Con ello se pretende proteger los intereses públicos (por constituir el bien jurídico protegido), del grupo profesional que sufra intrusismo, y de los que reciben la prestación profesional del intruso.

Es necesario que el desarrollo de ciertas profesiones sea realizado por personas idóneas para el cargo. La idoneidad es asegurada por el Estado, quien otorga (por ostentar competencias exclusivas) los títulos necesarios para el ejercicio de las profesiones y de sus actos propios.

Los actos propios se consideran “*aquellos que forman parte de la actividad profesional amparado por el título y que por eso mismo exigen una lex artis o específica*”

---

<sup>17</sup> BENITEZ ORTUZAR. *La obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional*, p 217 y ss.

<sup>18</sup> ORTS BERENGUER, *Derecho Penal*, PE 1993, p. 447

<sup>19</sup> GARCÍA ARÁN. *La obstrucción a la justicia y deslealtad profesional en el código de 1995*, pp. 296 y 297

*capacitación*”<sup>20</sup>. La configuración de actos propios viene otorgada por el ordenamiento jurídico, que atribuye funciones específicas para una profesión determinada, y reserva su cumplimiento a quienes hayan obtenido el título necesario. Basta con la realización de un solo acto propio por persona no acreditada para que constituya delito.

Finalmente, es susceptible de estudiar el supuesto de la autotutela y el conflicto de interés. Algunos autores, como PÉREZ CEPEDA<sup>21</sup>, no consideran que se pueda ser sujeto activo de este delito los mencionados en el artículo 467 CP, en aquellos casos en los que el abogado se defiende o el procurador se representa a sí mismo, sin perjuicio de que pueda dañar sus derechos procesales (derechos públicos fundamentales como la revelación de sus secretos), pero no obstaculizar o interferir en el proceso. No se da el requisito mencionado en el precepto al carecer un cliente ajeno a su persona al que asesorar, defender o representar.

No obstante, puede concurrir una incompatibilidad de esta tutela en casos de conflicto de interés, como concreta GARCÍA PLANAS sobre la redacción de éste mismo artículo, pues la autorrepresentación o autodefensa del procurador y abogado respectivamente, no puede compaginarse con “la defensa o representación de otra persona con intereses contradictorios”<sup>22</sup>.

### **iii. Casos especiales: el abogado del Estado, letrado de la Seguridad Social, y Administraciones Públicas**

El requisito obligatorio de “colegiación” se relaja cuando aparece la figura del abogado del Estado, letrado de la SS, de las CCAA y de los entes Locales, en cuanto a sus funciones de representación y defensa del Estado, etcétera. Todo ello conforme al artículo 447 LOPJ.

La Abogacía General del Estado (artículo 447 LOPJ), como parte del funcionariado público, está al servicio de la Administración Pública de España. Su figura se remonta al Real Decreto de 11 de marzo de 1881, por el que ya se fijaron sus dos funciones principales: actúa como defensor y asesor del Estado, incluso mantiene convenios de asistencia jurídica con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el

---

<sup>20</sup> STS 407/2005, de 23 de marzo de 2005

<sup>21</sup> PÉREZ CEPEDA. *Delitos de deslealtad profesional y procuradores*, p. 101

<sup>22</sup> GARCÍA PLANAS. *Prevaricación de abogados y procuradores*, p. 49

objeto de “lograr una mayor efectividad y coordinación de asistencia jurídica,” comprendiendo ésta “tanto el asesoramiento jurídico, como la representación y defensa ante cualquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado”<sup>23</sup>.

Por lo tanto, los abogados del Estado ostentan competencias de representación y defensa de los intereses del Estado en todos los órdenes jurisdiccionales<sup>24</sup>, además de la función consultiva, mediante su directa participación en el proceso o auxilio. Ejercen labores tanto de abogado como de procurador.

Lo mismo sucede con los letrados de la Seguridad Social<sup>25</sup>. Sus funciones contenciosas y consultivas se basan en “La representación y defensa en juicio de la Administración de la Seguridad Social en el ámbito de sus Entidades gestoras y Servicios comunes ante cualesquiera jurisdicciones”, así como en la “emisión de informes y demás funciones de asesoramiento jurídico, de la Administración de la Seguridad Social que afecten a las Entidades gestoras o Servicios comunes de la Seguridad Social. Informar de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles o laborales en vía judicial en los casos en que se soliciten el dictamen del órgano directivo. Asistencia a Mesas de contratación, así como el asesoramiento preceptivo en los términos previstos en la legislación sobre Contratos de las Administraciones Públicas”.

Esta relajación del vínculo incompatible entre las profesiones de abogado y procurador, supone un nuevo planteamiento sobre si, el condenado en costas debe satisfacer la remuneración del procurador de la Administración. El TS entiende que no, y así lo manifestó en el auto dictado el 19 de junio de 2012 (rec. 4005/2008), acordando excluir de la tasación de costas, las cantidades reclamadas por derechos de arancel, por considerar que las CCAA, para comparecer en el acto de juicio, no necesitan de procurador, dado que sus abogados asumen tanto la representación como la defensa de la Comunidad

Idéntica solución es aplicable para el caso de intervención de las Corporaciones Locales.; cuando no hacen uso de sus servicios jurídicos y designan un abogado colegiado, éste

---

<sup>23</sup> Convenio de Asistencia entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio del Estado) y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), 6 de junio de 2016

<sup>24</sup> Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas

<sup>25</sup> Artículo 22.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el RD 947/2001, de 3 de agosto

asume la defensa y representación, y así lo confirmó la ATS, 19 de abril de 2012, rec. 4005/2008:

*“Los procuradores que actúan en representación tanto de las Comunidades Autónomas como de los Ayuntamientos no pueden incluir sus derechos en las tasaciones de costas que se practiquen en los recursos en los que intervengan, sin perjuicio de que puedan reclamar de sus clientes la cantidad que estimen procedente”.*

En definitiva, el marco de regulación de las profesiones de abogado y procurador, se remite a las funciones de ambas profesiones en sus respectivos estatutos, y a la LOPJ. Las incompatibilidades que presentan no implican la no colaboración entre ambos sujetos; ello implicaría una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho, no viene afectado por los casos especiales mencionados anteriormente, en parte, por la ausencia de colegiación, y por la colaboración y labor que ejercita por formar parte del ámbito público.

#### **h) Responsabilidad del procurador de los tribunales**

En el apartado anterior, hemos estudiado las consecuencias del intrusismo y deslealtad profesional en el ejercicio de la procura (en relación con la abogacía). Cuando el procurador está en posesión de título acreditativo y está habilitado para desempeñar su cargo, y estando colegiado, también debe responder de determinadas situaciones.

En la actuación del procurador, ha de llevar aparejada la suficiente dosis de conocimiento técnico y científico, y estar presente el respeto a los principios que gobiernan el ejercicio profesional. Nos referimos a la deontología profesional.

En toda actuación profesional, se distinguen dos aspectos: el referido a la aplicación de los conocimientos técnicos (*lex artis*) y el que se refiere a la forma en que los conocimientos han de ser aplicados (*deontología*). La transgresión de la *lex artis* da lugar a la declaración de responsabilidad en caso de lesión al sujeto sometido a la aplicación de la ciencia, mientras que la infracción de los principios deontológicos, daría lugar a una responsabilidad disciplinaria con actuación en el seno de los propios colegios.

Por ello, partiendo de las normas establecidas por el Colegio General de Procuradores y los consejos autonómicos, y de la potestad que la ley concede a los colegios profesionales, éstos están facultados para sancionar aquellos actos que repugnan al correcto ejercicio de



la profesión. De acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, se concede plenas atribuciones y facultades a los colegios, para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Derivada de la función que el procurador desempeña como representante de la parte y cooperador de la Administración de Justicia, surge la triple responsabilidad: civil, penal y disciplinaria, conforme el artículo 546.2 LOPJ.

La responsabilidad nace desde el apoderamiento del procurador por parte del cliente ante notario (poder judicial), o desde el otorgamiento del poder *apud-acta* ante un letrado de la Administración de Justicia (esta opción puede ser más beneficiosa para el cliente desde el punto de vista económico, pues es gratuito, pero únicamente válido para un procedimiento en concreto, mientras que en el apoderamiento ante notario comporta un arancel reducido, válido para una pluralidad de juzgados y tribunales, y por el cual no se necesita renovación a la hora de pleitear nuevamente).

En resumen, todo profesional está y debe estar sometido a controles que permitan exigirle responsabilidades, de diversa índole, en relación con sus actos. Con independencia del cumplimiento de los códigos morales, los colegios profesionales deben mantener, promover y defender la deontología, vigilando el cumplimiento de determinados niveles de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo de sus colegiados. Pero, además, entre los requisitos que exige el estatuto para el ejercicio de la profesión, se contempla el de contratar un seguro de responsabilidad civil, como garantía de los daños que se puedan ocasionar al cliente por una anómala actuación, o por error involuntario.

### **3. Planteamiento sobre la necesidad de intervención del procurador**

La utilidad del procurador en los juzgados es indiscutible, pues actúa como representante del cliente, y su labor es especialmente eficaz cuando se presentan casos en los que el abogado no trabaja en el domicilio donde se desarrolla el pleito. La obligatoriedad de esta cuestión viene justificada en los artículos 23 y 31 de la LEC: para comparecer en juicio, se precisará de abogado y procurador, entendiendo a éstos como representantes de sus clientes y los únicos autorizados para actuar en juicio. Pese a ello, existen varias posturas sobre su figura.

De un lado, respecto a la pretensión de la compatibilidad de esta profesión con otras, y bajo la opinión de ROLDÁN PÉREZ<sup>26</sup>, procurador de los tribunales, director de la Escuela de Práctica Jurídica y profesor honorario de la cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, la complejidad y el tecnicismo de las normas reguladoras del procedimiento, hacen de la Procura una institución necesaria e imprescindible, diferenciando por un lado, la dirección técnica que atribuida al abogado, y de otro, la representación procesal de ambas partes ante los tribunales, que es competencia del procurador de los tribunales. Siguiendo esta línea, puede afirmarse que la intervención de éstos evita el extravío de asuntos y el perjuicio de los litigantes referidos a las nulidades, reducción de medios de defensa y la falta de orden y exactitud en que su inexperiencia en los negocios judiciales les haría incurrir constantemente.

El manifiesto en la Exposición de motivos de la LEC, cuando indica que “*esta Ley mira... ante todo... a quienes demandan o pueden demandar tutela judicial, en verdad efectiva y para sus derechos legítimos*”, podría interpretarse que la efectividad viene relacionada con la representación técnica, como garantía, poniéndose a disposición del litigante. Con todo ello, cabe mencionar el artículo 23 de la misma ley, donde se establece la concreción de que las actuaciones procesales deben realizarse *con arreglo a lo dispuesto en esta ley*: se está otorgando seguridad jurídica, otra garantía para el proceso.

De otro lado, el incremento del uso del internet, y la instauración de la justicia electrónica<sup>27</sup>, genera nuevas disputas sobre el papel del procurador. Si la justicia puede funcionar electrónicamente, ¿cuál es el motivo para necesitar a una persona que recoja notificaciones físicamente, o que reenvíe a los abogados las notificaciones que él mismo ya ha recibido por vía electrónica, por medio de Lexnet, Avantius, o sistemas análogos? ¿Debe limitarse el procurador a ser un simple notificador o comunicador entre juzgados y los demás sujetos que intervienen en el proceso? ¿O puede asumir otras tareas con más contenido jurídico?

---

<sup>26</sup> ROLDÁN PÉREZ. *El procurador como representante de la parte en el proceso*. Escuela de Práctica Jurídica. Conferencia 2016. Disponible en: <https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11168/Conferencia%20d%C3%ADa%2012%20Abril%20de%202016.pdf?sequence=1>

<sup>27</sup> Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia

La dimensión pública del procurador quedó reflejada en el *Libro Blanco de la Justicia*, aprobado por el CGPJ en el año 1997, dejando constancia de que los jueces y magistrados se mostraban partidarios del carácter preceptivo de la intervención del procurador en el proceso, justificando que *en aquellos procedimientos en los que no se exige dicha intervención, se originan importantes disfunciones y dilaciones en la tramitación de las actuaciones*.

El *Libro Blanco de la Justicia*, por ello, mantenía la Procura como una profesión diferenciada e independiente. Pero, a pesar de reconocer la importancia de su intervención, añade la necesidad de considerar la formación de un sistema en el que se mantenga la figura del procurador, como representante de los ciudadanos ante los tribunales, y además pudiera asumir otros cometidos, colaborando con los órganos jurisdiccionales y abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento que se trate. En concreto, se refiere al marco de actos comunicativos, en las fases procesales de prueba y ejecución, y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados, con los términos y límites correspondientes.

Los medios electrónicos se han instaurado de forma definitiva como instrumento de trabajo que garantiza el buen funcionamiento del proceso civil. El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, estableció obligatoriamente a todos los profesionales de la justicia, incluidos los procuradores, a hacer uso de estos medios, en concreto, para la presentación de documentos y escritos, recepción de actos de comunicación, etcétera.

Esta decisión supone un planteamiento sobre el incremento del valor que tiene el hecho de que un abogado tenga la obligación de enviar la documentación precisa a un procurador, que a su vez se firma por ambos profesionales y se presenta en el sistema informático judicial, aunque, la cuestión podría basarse en la causa por la que el abogado no puede hacerlo de manera directa, teniendo en cuenta el régimen de incompatibilidades de ambos profesionales y la normativa vigente, ¿Hay una verdadera causa para continuar separando esta labor de las funciones del abogado? ¿O estamos ante una situación de mantenimiento de este régimen por tradición histórica?

Desde el punto de vista económico, no es lo mismo asumir el pago de un solo profesional (abogado) que dos (abogado y procurador). El sistema arancelario por el que cobran los procuradores resulta independiente del resultado del pleito. Es el Ministerio de Justicia la institución encargada de concretar los aranceles o precios fijos. Desde Europa, además de insistir en la supresión de incompatibilidades entre ambas profesiones, la Comisión Europea considera que este sistema de precios, al ser inexistente en cualquier otra actividad profesional, proponen medidas para la limitación del impacto sobre los clientes<sup>28</sup>.

En resumen, lo que se pretende desde Europa es deshacer la situación actual del procurador en cuanto a privilegio se refiere, optando por una evolución de la figura, incluso el fin de su obligatoriedad, para la obtención de un resultado compatible entre la eficacia del proceso y el número de intervinientes necesarios para ello, que no suponga un sobre coste para los consumidores.

#### **4. Comparativa con otros países**

Tras un paso por la historia, podemos afirmar que la profesión a la que nos referimos, para ciertas instituciones como la Comisión Europea, no tiene lugar en la sociedad tal y como la conocemos actualmente y, hasta en algunas ocasiones, se ha procedido a su consiguiente desaparición en muchos países del mundo. Solo se conserva esta figura en apenas un cuarto de los Estados.

En la Unión Europea, países como Portugal, Francia, o Polonia mantienen la figura del procurador de una manera similar a como se hace en España, mientras que, en otros, podemos apreciar notables diferencias, fundiéndose con la figura del abogado (Bélgica).

La comunicación emitida en el año 2016 desde la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones, relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales, comentó que todos los Estados miembros establecen reservas a los abogados, aunque no de manera homogénea. Aunque destacó varios países donde se establecían competencias exclusivas para los sujetos responsables de la representación técnica en los tribunales, recomendó que el Gobierno pusiera a examen “*el alcance de*

---

<sup>28</sup> Desarrollado en el apartado 5.b) de este trabajo “*Expediente Europilot*”.

*las actividades reservadas a los procuradores y, en particular, si determinadas actividades como la representación técnica o la comunicación de documentos a los tribunales puede compartirse con los abogados”.*

Destacan, por su similitud con el sistema español, las figuras siguientes:

***Huissier de Justice (Francia)***<sup>29</sup>: La *Ordonnance* n°45-2592 de 20 de noviembre de 1945, desarrollada por el *Décret* n°165-222 de 29 de febrero 1956, regula el estatuto del *huissier de Justice* y su condición personal para el ejercicio de la profesión, así como sus funciones, límites, y sistema de acceso.

Se trata de una profesión liberal ejercida bajo reglamentos y autorizaciones por parte del Gobierno, otorgándoles la categoría de *officiel ministériel* y cuya retribución económica resulta establecida por un arancel<sup>30</sup>. Su labor es realizada dentro de una delimitación territorial que se corresponde al tribunal del Gran Instance al que están asignados. Las funciones de este procurador son de carácter exclusivo. Por otro lado, está facultado para dar fe pública en los supuestos en los que se lo permite la ley, actuando como *officier public*.

Para una mayor comprensión de su labor y la relación que mantiene con la administración de justicia, necesitan de auxiliares de los jueces y auxiliares de las partes. Los auxiliares de los jueces son conocidos como *greffiers*, figura similar al letrado de la Administración de Justicia en España, y se trata de funcionarios que realizan tareas de expedición de copias y demás certificados, de asistencia a los magistrados, con el preceptivo levantamiento de acta de los actos practicados.

Por otro lado, los sujetos auxiliares de las partes también realizar una tarea de contribución al correcto funcionamiento de la administración de justicia: *advocats* y *officiers ministériels*. Como ya se ha indicado previamente, los últimos corresponden a los *huissiers de justice*. Son los únicos que pueden actuar ante la Corte de Apelación, pero, a diferencia de la normativa española, los abogados también pueden representar a las partes y realizar trámites procesales ante cualquier órgano jurisdiccional, excepto el

---

<sup>29</sup> Loi 90-1259, de 31 de décembre de 1990 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques.

<sup>30</sup> Décret du 12 de décembre de 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice Nouveau Code de procédure civile

*Conseil d'Etat* y la *Cour de cassation*. La función representativa del *avocat* supone un mandato indirecto que es concedido con su comparecencia en el acto de la vista a nombre de su representado.

En concreto, las funciones principales del *huissier de Justice* quedan determinadas en el artículo 1 de *l'ordonnance 45-2592*, consistentes en la notificación a los particulares y abogados; ejecución de títulos judiciales y demás actos referentes a ello, ya sea sobre codenas dinerarias o no dinerarias (por ejemplo: elaboración de embargos procedentes).

Del mismo modo, este auxiliar está autorizado para confirmar la verdad de determinados actos, para que ello pueda utilizarse posteriormente como prueba en juicio y se le encomienda la realización de reclamaciones extrajudiciales de créditos (levantamiento de documentos de reconocimiento de deuda), así como su intervención como *huissier-audiencier*, asegurando el mantenimiento del orden de las salas en sede de un tribunal de Justicia, a través de la emisión de notificaciones de actos entre los abogados. Por último, en caso de no darse la intervención de un comisario-tasador, ostentan los *huissier* la facultad de tasar y vender públicamente, ya sea por vía judicial o voluntaria de bienes muebles, y podrán solicitar autorización para ejecutar actos como corredor de seguros o administrador de fincas.

En relación con este interventor de la Administración de Justicia francesa, destaca la el *avoué* como jurista encargado de la representación de sus clientes en instancias superiores, desaparecida en 2010 por la fusión de las profesiones de *avoué* y *avocat* ante la *Cour d'Appel*.

***Solicitor, Registered Agent (Reino Unido)*<sup>31</sup>:** Estos sujetos trabajan, por lo general, como asesores de sus clientes fuera de los juzgados. Son profesionales del derecho con capacidad para redactar contratos, participar en transacciones, preparar divorcios o testamentos. Pero, además, tienen capacidad de representación de su cliente, pudiendo comparecer ante el juez en tribunales inferiores (para la comparecer ante tribunales superiores, acudirán a los *barrister*, expertos en áreas legales especializadas, organizados en cámaras y que actúan a solicitud de los *solicitor*, no teniendo relación alguna con el cliente de éste).

---

<sup>31</sup> *Solicitors Act 1974*

Los *solicitor* pueden desarrollar sus labores de manera individual o asociándose, y pueden trabajar para empresas o autoridades. El organismo que regula su trabajo es la *Law Society*.

La comunicación de la Comisión referida anteriormente también estableció recomendaciones a tener en cuenta, consistentes en dotar la profesión de mayor flexibilidad, en relación con las obligaciones de seguro de responsabilidad civil, pues Inglaterra y Gales destaca por los grandes costes justificados con las actividades exclusivas que ostentan estos sujetos. Lo que se pretende con esta recomendación es reducir la carga financiera de los *solicitors*.

Por otro lado, el procurador, tal y como se entiende en España, no tiene lugar en el ordenamiento jurídico de Alemania. Asumiendo que su principal cometido es representar a las partes ante los órganos jurisdiccionales, la figura alemana que más se asemeja nuestro procurador es el *Bevollmächtigte*, aunque se presenta como un mero representante procesal cuyas funciones no se equiparan a la del procurador español.

Fuera del ámbito europeo, nos encontramos con el procurador General de América Latina, cuyas competencias se basan en la defensa y protección de derechos de los ciudadanos e intereses públicos. Es un alto cargo del Ministerio de Justicia de cada nación, pero tampoco puede equipararse a las funciones del procurador español, pues en muchos casos, la figura a la que más se asemeja es a la del fiscal general, donde ejerce unas labores propias de abogado del Estado, o defensor del Pueblo.

## **5. El procurador en el futuro.**

### **a) Iniciativas**

#### **I. Mejora del sistema telemático**

Nos encontramos ante un periodo de transición, pero, sobre todo, de adaptación. Las nuevas realidades sociales precisan de nuevos métodos de trabajo sobre el intercambio y protección de datos personales<sup>32</sup>, más eficientes, a través de la combinación de la informática y de la tecnología de la comunicación para la recepción y envío de datos.

Un ejemplo de la nueva forma de tratamiento de datos es el sistema de subastas judiciales electrónicas, donde ha desaparecido el papel protagonista del procurador como tramitador de la misma, por el que se ha conformado su propio código<sup>33</sup>.

Actualmente se realiza por medio de un portal único de subastas judiciales y administrativas, el Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, en función de lo establecido por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y Registro Civil, desarrollada posteriormente en otros cuerpos legales<sup>34</sup>, conforme el procedimiento de los artículos 644 y ss la LEC.

A pesar de paliar los problemas más significativos de la normativa anterior, LÓPEZ PICÓ<sup>35</sup> enumera una serie de reflexiones a tener en cuenta. La primera de ellas es la falta de delimitación del concepto de subasta judicial, pues es el punto de partida para hablar

---

<sup>32</sup> Normativa: LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; RD 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad en los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal; Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del CGPJ, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, art. 86 y ss.; Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Código de Conducta para los usuarios de Equipos de Sistemas Informáticos al Servicio de la Administración de Justicia.

<sup>33</sup> Código de Subastas Electrónicas, edición actualizada 2 de octubre de 2018. Disponible en: [file:///C:/Users/User/Downloads/BOE-162\\_Codigo\\_de\\_Subastas\\_Electronicas.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/BOE-162_Codigo_de_Subastas_Electronicas.pdf)

<sup>34</sup> RD 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte e las subastas judiciales y notariales.

<sup>35</sup> LÓPEZ PICÓ. *Diez consideraciones críticas al nuevo modelo de subasta judicial electrónica: una realidad práctica necesitada de revisión*. Disponible en: [http://www.sicarm.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA\\_6943&nombre=Lopez-Pico.pdf](http://www.sicarm.es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VERMULTIMEDIA_6943&nombre=Lopez-Pico.pdf)



sobre ésta: la LEC no establece en ningún artículo la definición conceptual para comprenderla de forma exacta, ni tampoco la de su modalidad electrónica.

La segunda consideración se refiere a la ausencia de rentabilidad del objeto de la subasta judicial, respecto de los bienes embargados cuyo valor no alcance siquiera a los gastos ocasionados por la subasta, tenga exceso de gravámenes o carezcan de contenido patrimonial<sup>36</sup>. La solución podría descansar en la responsabilidad patrimonial universal del CC, pero, aun así, supone una garantía incierta, pues no puede asegurarse la “buena racha” del deudor en el futuro.

En tercer lugar, la normativa actual ha suprimido la preceptiva notificación de la convocatoria al ejecutado no personado en su domicilio, considerando suficiente su publicación en el BOE. En este sentido, el autor considera que no es tenido en cuenta el perfil de ciudadano al que se enfrenta el legislador, al presentar la frecuente incapacidad de seguir todas las novedades publicadas en el Boletín, a menudo justificado por falta de conocimientos para ello.

Por otro lado, en relación con la suspensión de subastas, el LAJ es el único sujeto competente para suspender y reanudar subastas. La cuestión a discutir es qué sucede cuando el LAJ se olvida de reanudar la subasta por error. Transcurridos los 15 días hábiles para la suspensión, la reanudación generaría una nueva puesta en marcha del proceso judicial, además de la consecución de las operaciones pertinentes para llevar a cabo la nueva subasta. Todo ello genera unos costes susceptibles de sufragar, sin poder confirmar la identidad de quien asumirá los gastos y, en caso de que fueran asumibles por el litigante, hasta qué punto y de qué manera procedería la responsabilidad civil del LAJ.

Otro ejemplo es el caso de LexNet: según GOMEZ CINTAS<sup>37</sup>, es el sistema comunicativo electrónico securizado, que permite la comunicación de forma bidireccional entre las oficinas judiciales y demás operadores jurídicos (abogados y procuradores). Facilita la fluidez de procesos internos de actos de comunicación procesal realizados por los órganos judiciales.

---

<sup>36</sup> Arts. 643.1- 666.2-605 LEC

<sup>37</sup> GÓMEZ CINTAS, *“Las aplicaciones de gestión procesal. Visión práctica”*. Secretarios Judiciales, Modernización y nuevas tecnologías, Madrid, 2003, p.6293

Dicho esto, si bien garantiza seguridad en la autenticación del emisor del documento, confidencialidad y seguridad del sistema<sup>38</sup>, integridad del contenido, imposibilidad de repudio (pues el emisor no puede negar el envío), y la fecha de llegada de los escritos, se siguen presentando dificultades, basadas en varios factores, como la falta de altas en el sistema, ligado a la poca formación informática de los procuradores, o los propios medios técnicos equipos informáticos de los que se sirve el procurador, resultando obsoletos.

Para concluir, bajo el punto de vista de GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS<sup>39</sup>, la normativa no resulta del todo clara a la hora de su aplicación práctica respecto a este sentido: por un lado, el artículo 103 de la CE trata la exigencia proporcional el derecho al ciudadano a comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos<sup>40</sup>. Sin embargo, los poderes públicos deben garantizar esos sistemas para que el derecho al que se refiere la Constitución pueda ejercerse válidamente.

En resumen, la informatización de los trámites ha supuesto un primer paso hacia la formación del nuevo perfil de la Administración de Justicia, más eficiente y a mayor velocidad, incrementando la fiabilidad de los escritos a través de controles internos sobre identificación que el propio sistema exige para hacer uso de la plataforma. Asimismo, resulta difícil asumir que ese futuro es posible mientras no se doten a los usuarios de formación y equipos informáticos actualizados para el desempeño eficaz como tramitadores de escritos y documentos en la vía telemática.

---

<sup>38</sup> LexNet se ha fundamentado en la arquitectura de seguridad, elementos de custodia de claves y análisis de los mensajes para evitar la posible difusión de virus informáticos.

<sup>39</sup> GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS. *Problemas prácticos derivados de la implantación de LexNet: la experiencia de la Audiencia Nacional en materia de notificaciones*, p. 61. Disponible en: [https://www.uv.es/ajv/art\\_jcos/art\\_jcos/num23/LexNet.pdf](https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num23/LexNet.pdf)

<sup>40</sup> Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

## II. Aproximación a la figura del *huissier de justice*

Basado en la opinión RICART ANDREU<sup>41</sup>, el futuro de la procura estaría encaminado a asimilar la persona del procurador con la del *huissier de justice*, por su carácter liberal y en materia de ejecución de sentencias, tal y como lo han hecho la mayor parte de los países de Europa.

En nuestro sistema administrativo, la oficina judicial queda colapsada ante la cantidad de ejecuciones (sobre las que debe resolver) que se prolongan indefinidamente, y ese colapso se ha visto incrementado tras la crisis económica y los procesos iniciados a consecuencia de las cláusulas bancarias abusivas, conocidas como “cláusulas suelo”, además de la insuficiencia de recursos de los que se sirve la oficina.

Aunque en el último año han abundado las propuestas para la actualización y mejora del sistema de procura<sup>42</sup>, estas se resisten a establecer competencias de ejecución delegada, la cual aportaría múltiples ventajas: se trata de un sistema implantado en varios países; rápido y seguro, pues el procurador, como agente de ejecución queda bajo el control del Juzgado. Además, debido a sus conocimientos como Licenciado o Graduado en Derecho, su formación como experto en Derecho Procesal, y su experiencia como representante técnico ante los tribunales, es pleno conocedor de todos los trámites que entrañan el proceso, lo que garantiza un desempeño del trabajo eficaz.

Por otro lado, el agente liberal al que se refiere el autor cobra directamente de su cliente, por lo que ostenta un mayor interés en agilizar trámites.

En este sentido, y para concluir, se trata atribuir nuevas funciones, complementarias a las que ya ostenta el procurador, para garantizar la fluidez del proceso. Labores como diligencias de los lanzamientos y embargos o investigación de patrimonio conllevaría la relajación de labores de los Juzgados, con el fin de que atiendan a esas demandas congeladas, y con todo ello, se conseguiría reducir considerablemente los plazos de resolución. Una vez ejecutada la diligencia, el Juzgado la confirmaría o anularía, por lo que es el responsable legítimo del resultado de ésta.

---

<sup>41</sup> RICART ANDREU. *El procurador en la historia*. Disponible en: <http://www.iuspostulandi.com/?q=elprocurador>

<sup>42</sup> Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2018, pp. 38 a 76. Disponible en: <http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:8efdb75e-5f29-4dab-9e5c-77b1bfa8ac67/PAN-2018.pdf>

## **I. Propuestas desde el Consejo General de Procuradores de España**

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez ha propuesto en numerosas ocasiones al Ministerio de Justicia que los procuradores asumieran tareas relativas a la notificación y ejecución que hoy en día realizan los Servicios Comunes Procesales. Las tareas de comunicación e investigación podrían llevar a cabo su tramitación de una manera más ágil si fuera realizada por un profesional que cumpla el mandato de su cliente (litigante), en lugar de tramitarse directamente por el personal de la Administración de Justicia.

Se trata de dar facultades de investigación de informaciones de las partes mediante el acceso a las bases de datos de los tribunales, pudiendo llevar a cabo bajo su entera responsabilidad, las decisiones de notificación y ejecución derivadas de los órganos judiciales. Así las cosas, las funciones del procurador se concretarían en la colaboración, hasta el efectivo cumplimiento, de lo que se acordó en los tribunales; una figura similar al *huissier de justice* en los países francófonos. Aunque, esta propuesta ya ha levantado críticas por parte de los letrados de la Administración de Justicia.

Resulta necesario llevar a la práctica todas las tareas modernizadas que las instituciones requieren para su mejor funcionamiento, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 ha mejorado considerablemente el funcionamiento de los tribunales. Las posibilidades del sistema se han manifestado con el incremento de los pleitos derivados de la última crisis económica.

En otro orden de cosas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también se ha querido referir al futuro de la profesión: este organismo independiente, cuya labor consiste en la promoción y garantía de la competencia efectiva, ha emitido recientemente, un informe, a solicitud del Ministerio de Justicia, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC (artículo 5 de la Ley de creación de la CNMC), sobre el anteproyecto de ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (IPN/CNMC/004/18<sup>43</sup>). La pretensión de esta norma consiste en flexibilizar las condiciones de acceso y ejercicio de tales profesiones.

---

<sup>43</sup> Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Disponible en: [https://www.cnmc.es/sites/default/files/1974298\\_5.pdf](https://www.cnmc.es/sites/default/files/1974298_5.pdf)

Las propuestas del anteproyecto, mantienen la incompatibilidad del ejercicio de ambas profesiones, aunque se precisará de un único título profesional para ejercer cualquiera de las dos. Además, mantiene la exclusividad de los procuradores para el ejercicio de las funciones de representación técnica.

Finalmente, como consecuencia de la modificación, se permitirá a las sociedades profesionales ser integradas por abogados y procuradores, siempre teniendo en cuenta las incompatibilidades que le separan, y la aprobación de la ley supondrá un cambio en el sistema arancelario de los procuradores, referido a la mayor libertad de precios, aunque la propuesta de reforma solo establece una reducción de la cuantía máxima que un procurador puede recibir por un caso (75.000€).

#### **b) Expediente Europilot**

La Unión Europea, desde la Comisión, ha ejercido presión para que se realicen cambios sobre la figura de la procura en España. Tal es esa presión, que dio origen a la apertura del *expediente Europilot* en el año 2011, con la emisión de una Carta de Emplazamiento en Julio de 2015 en el marco del procedimiento de infracción 2015/4063, por entender que las normas nacionales relativas a los procuradores, contenían *obstáculos excesivos e injustificados de servicios*, y planteó soluciones a negociar con el Gobierno, como el replanteamiento de sueldos y sistema arancelario, posible desaparición de la incompatibilidad laboral entre el procurador y el abogado, entre otras; pero nada de ello se estableció. El Gobierno de España reunió documentos de justificación consistentes en varios informes, como el que encargó a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, por el que quedan justificados los sueldos, tres años después de la recepción de la Carta de Emplazamiento.

Ante el conflicto con Europa, se procedió a desarrollar un anteproyecto de la Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (22 de marzo de 2018), cuya importancia reside en la propuesta de cambios sustanciales para el futuro de la profesión.

Se estima que se ofrezcan facilidades de acceso a ambas profesiones, estableciendo un sistema de formación único, es decir, una única vía de acceso. Además, buscan la modificación de la Ley de Sociedades Profesionales, con el objetivo de permitir que la prestación del servicio de ambas profesiones pueda realizarse por una misma sociedad

profesional, siendo económicamente más accesible para los consumidores, pues se evitarían gastos excesivos. Por último, que los abogados puedan asumir la representación de sus clientes, asemejándose a la figura del abogado del Estado, letrados de la Seguridad Social y las Administraciones Públicas.

Con todo ello, la Comisión Europea ha considerado que, el impedimento establecido para los abogados en desarrollar las tareas propias de la procura, como la representación técnica y la realización de actos de comunicación de las partes a los tribunales, resulta una medida desproporcionada y aboga por la modificación de ambas figuras, para la compatibilidad de sus funciones.

## **6. Conclusiones**

La procura constituye una figura jurídica cuya evolución ha estado marcada desde sus orígenes por las exigencias de la sociedad que le rodea. Mientras la normativa vigente hace imprescindible a estos sujetos en multitud de procesos judiciales (no son preceptivos en caso de juicio verbal de cuantía inferior a 2.000€ o petición inicial de procedimientos monitorios), se aboga desde el CGPE por la inclusión de nuevas competencias ejecutivas para el futuro de sus relaciones con la Administración de Justicia.

En contrapartida, existen corrientes críticas, como la procedente de la UE, sugieren la desaparición de manera indirecta, es decir, tal y como la conocemos hoy en día. Si bien la Comisión Europea no propone al gobierno español que prescinda de esta figura, sí que pretende difuminar a aspectos característicos de la procura como es la incompatibilidad de esta profesión con la abogacía, o la implantación de un sistema de acceso único, como pasos previos para fusionar ambas ocupaciones, por lo que lo que se pretende al final es la desaparición por absorción de sus competencias.

Muchas de los reproches a los que se enfrentan los procuradores nacen del desconocimiento de su labor. El destino de esta profesión, aunque da pinceladas sobre su situación del futuro, sigue siendo incierto. Por el momento, tras el estudio que se realiza en este trabajo, y bajo el amparo de varios autores conocedores de la materia, no se puede afirmar que podamos prescindir de este interventor a corto plazo, pues sigue siendo el sujeto fundamental que garantiza la representación técnica y eficaz del litigante en el proceso.

Con todo, en especial atención la integración de la tecnología y su afección en la vida del sujeto interviniente en la Administración de Justicia, deben establecerse cautelas para establecerla eficazmente de forma progresiva. Esto incluye tanto un buen servicio electrónico, como la consiguiente formación de los individuos que forman parte de la comunidad usuaria, pues en algunos casos, como procuradores veteranos de avanzada edad, quienes pueden ser los más expuestos al riesgo de deceso laboral por su mínima formación en cuanto a conocimientos informáticos se refiere.

## 7. Bibliografía

ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *Curso de Derecho Romano*. Derecho procesal civil romano, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955.

BANACLOCHE PALAO, J., y CUBILLO LÓPEZ, IJ., *Aspectos fundamentales de Derecho procesal civil*, 4ª ed, Madrid, La Ley, 2018

CEDENÑO HERNÁN, M., *Algunas consideraciones sobre la postulación y la tutela de los derechos económicos de los procuradores y abogados en el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

<https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/ajr/article/view/763/970>

CGPJ, *El libro blanco de la Justicia*.  
[http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/2.\\_libro\\_blanco\\_de\\_la\\_justicia\\_documento\\_no\\_2.pdf](http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161220/2._libro_blanco_de_la_justicia_documento_no_2.pdf)

COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales*. Bruselas, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0820>

GRAU MORANCHO, R., *Procuradores, debate sobre la Representación Procesal*. Ed. Dykinson, Madrid, 2005

HERRERO PEREZAGUA. JF., *La representación y defensa de las partes y las costas en el proceso civil*, Madrid, La Ley, 2001.

QUINTANA ORIVE, E., BLANCH NOUGUÉS, JM., *Nuevas consideraciones en torno al cognitor y al procurator in rem suam*, Universidad Autónoma de Madrid, RIDA. Nº45, 1998. <http://www1.unipa.it/dipstdir/portale/romano/pub/riviste/ORIVES-NOUGUES.pdf>